Laboratorios de Vivienda (LAVs)

Asentamientos precarios y vivienda social: impactos de la covid-19 y respuestas

Nota Conceptual[1]

Abril 10/04/2020

El presente *paper* fue elaborado como base para la reflexión desarrollada a través del Laboratorio de Vivienda (LAV) —realizado el 14 de abril de 2020—, promovido por el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH), a través de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) y desarrollado a través de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano (UHPH), con el apoyo de: Cities Alliance, ONU Hábitat, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina EUROsociAL+, la Red de Investigadores en Vivienda y Hábitat de las Américas (RIVAH) con especial mención a Development Planning Unit/UCL. Igualmente, se destaca que el proceso de reflexión y diálogo iniciado en la Región Sica desde el CCVAH/SISCA será escalado y profundizado en el seno de la Asamblea de Ministros y Autoridades Máximas en Vivienda y Desarrollo Lrbano de Latinoamérica y el Caribe (MINURVI), quienes también han participado en el proceso.

[1] Autoras: Catalina Ortiz (PhD), University College London, y María Mercedes Di Virgilio (Dra.), Universidad de Buenos Aires. Con la contribución de: Héctor Becerril Miranda, Diego Aulestia, Roi Chiti, Gloria Yanira Quiteño, Gabriella Cecilia Portillo, Patricia Gryciuk, Anacláudia Rossbach

Objetivos

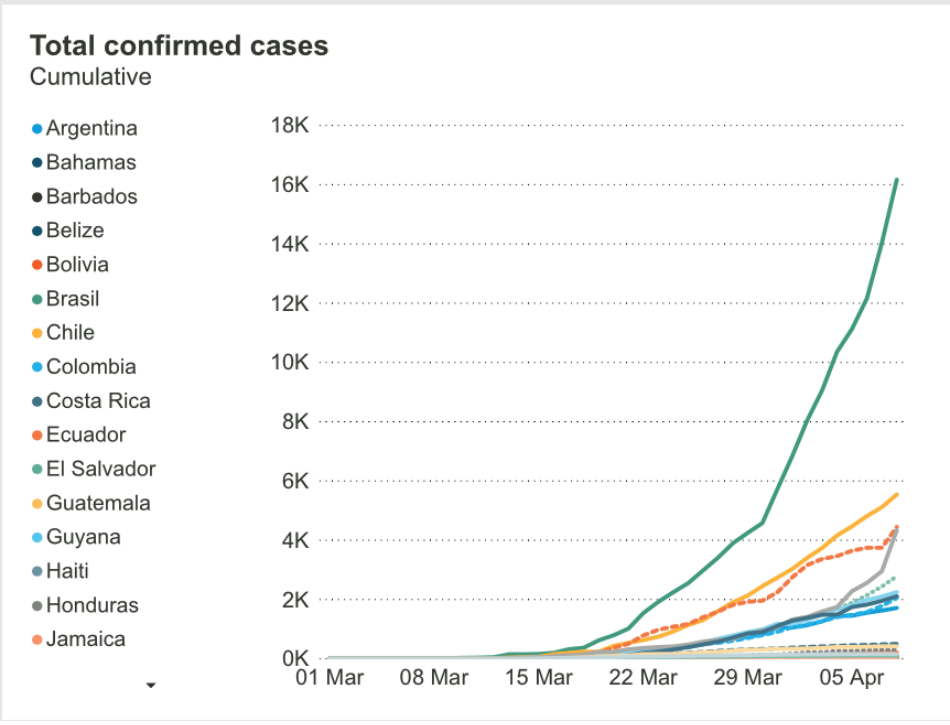
Identificar respuestas a la crisis y emergencia generada por la COVID-19 y recoger insumos para acción pública en los asentamientos precarios de Centroamérica y la política de vivienda social, teniendo como perspectiva la promoción de un cambio estructural del contexto de desigualdades y segregación en las ciudades.

Palabras claves

COVID-19 – asentamientos informales – emergencia – pandemia

Descripción de la problemática

La crisis que estamos enfrentando "pandemia COVID19" es un fenómeno global que está amenazando países y comunidades en todo el mundo. Desde el 22 de enero hasta la fecha (5 de abril) se han reportado 1.600.000 casos de COVID-19 a nivel global, de los cuales 30.352 contagios y 1.052 muertes corresponden a la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo con los datos reportados por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para la misma fecha se registraban 3.822 casos en la región SICA.



Fuente: https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard

Aun cuando algunos países y ciudades pueden estar mejor equipados que otros para enfrentar la pandemia, resulta cada vez más claro que "nadie se salva solo". La crisis ha descolocado a los sistemas económicos y sociales a escala global, poniendo en evidencia que la respuesta debe ser coordinada atendiendo todos los sectores de la población. Sólo de ese modo podremos construir una salida viable y resiliente de para esta fase de la pandemia.

Buscar rápidamente soluciones eficaces para mitigar el contagio, preservar la vida de individuos y grupos y garantizar el funcionamiento de las dinámicas socioeconómicas básicas de nuestras comunidades debe ser la prioridad, asegurando que ningún grupo social quede detrás. En este sentido decisiones informadas por evidencias y consideraciones de naturaleza epidemiológicas y socioeconómicas son fundamentales y constituyen el desafío mayor de la política y acción pública.

La complejidad para enfrentar la pandemia radica en las múltiples vulnerabilidades que se deben abordar simultáneamente en múltiples escalas. Todas ellas se agudizan en barrios y asentamientos de vivienda precaria. En estos contextos se combinan la **vulnerabilidad epidemiológica** -que refiere a las condiciones de vida prexistentes-, la **vulnerabilidad de transmisión** -que refiere a la capacidad de realizar de modo efectivo el distanciamiento social y a la infraestructura de higiene existente-, la **vulnerabilidad del sistema de salud** -vinculada a la capacidad de atender en cuidados intensivos- y la **vulnerabilidad de las medidas de control** -asociada **a** los fallos derivados de las medidas de protección social (SSHAG, 2020).

Según muestra el informe de Social Science in Humanitarian Action (25 de marzo, 2020), la mayor parte de la información que actualmente circula sobre COVID-19 se basa en datos pertenecientes a contextos de ingresos medios y altos y solo en pocos casos incluye estimaciones relacionadas a los sectores de bajos ingresos y/o informales. Asimismo, las recomendaciones para prevenir los contagios (lavarse las manos, aislarse a sí mismo y físicamente mantener distancia) suponen la existencia de condiciones básicas de vida y el acceso a servicios esenciales (por ejemplo, agua, saneamiento, espacio adecuado, etc.). Ese mismo informe -al igual que otras organizaciones como ONU-Habitat en su llamamiento desde el sistema de Naciones Unidas- aclara que muchas de estas estrategias encuentran serias dificultades para ser implementadas en barrios y asentamientos precarios. Consistente con los señalamientos que circulan en ámbitos internacionales, distintos países de la región están examinando este desafío y formulando recomendaciones para enfrentar la pandemia en contextos de alta vulnerabilidad social y económica.

A respecto, el informe elaborado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus a requerimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina pone en evidencia los desafíos que enfrenta la población de que habita en barrios y asentamientos precarios para protegerse de los peores impactos de COVID-19. Datos sobre barrios y asentamientos precarios en la Región Metropolitana de Buenos Aires (región noroeste) ponen en evidencia que el acatamiento de las medidas de aislamiento social en la mayoría de los casos es parcial o bajo.

Las causas para el acatamiento parcial o el no acatamiento de la medida parecen ser múltiples, identificándose cuatro factores críticos: (1) las dificultades a la hora de limitar las salidas para aprovisionamiento de alimentos y medicamentos. Entre otras razones, los vecinos esgrimen que la falta de ingresos mensualizados y fijos impide el aprovisionamiento. Asimismo, en los hogares de menores ingresos normalmente no es posible planificar los consumos y, por lo tanto, tampoco de las compras. Los comercios de proximidad o tienen precios más altos o bien tienen poca mercadería. Gran parte de las familias, además, sale buscando asistencia alimentaria de parte del estado de forma directa o a través de organizaciones. (2) En segundo lugar, se señalan las condiciones deficitarias de la

vivienda, así como la falta de acceso al agua por cañería dentro de la vivienda -lo que obliga a la población a salir para su aprovisionamiento. En los asentamientos o barrios con viviendas más pequeñas y/o precarias, el estudio muestra que no es posible entender la cuarentena como un aislamiento adentro de las casas pues "la cuadra se vive como extensión de la vivienda y el aislamiento se entiende, en todo caso, dentro del perímetro del barrio" (UNGS, 2020:1). (3) Un tercer factor, refiere a la numerosa presencia de cuentapropistas que, en el contexto de la pandemia, ven comprometido el sustento básico de la familia e intentan lograr una changa aún en el marco de la cuarentena obligatoria. (4) Un cuarto factor, de alta incidencia refiere a descrédito de las familias respecto de la pandemia y de las medidas para enfrentarlas. "Los informantes consideran que hay familias que no creen que el virus llegará a los barrios o que […] el aislamiento es para la clase media" (UNGS, 2020:2). Finalmente, aun cuando no parece emerger con tanta fuerza, el estudio identifica a la presencia de personas violentas en el hogar y/o con consumos problemáticos como otra de las cuestiones que impiden el aislamiento domiciliario.

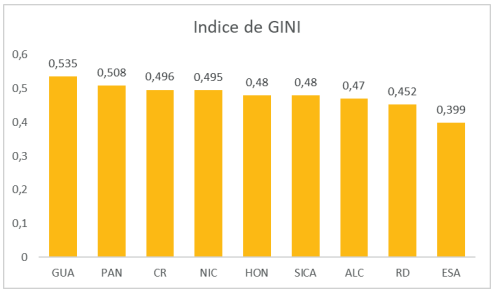
En estas condiciones, resuelta evidente que la vivienda difícilmente pueda constituirse en la defensa de primera línea contra el coronavirus. La situación se torna especialmente preocupante cuando advertimos que, en América Latina y Caribe, según datos de CEPAL (2018), en promedio, en 2017, el 21% de la población urbana de la región vivía en vivienda precaria. Ello representa más de 100 millones de personas viviendo en asentamientos vulnerables urbanos. Se trata de asentamientos informales que concentran pobreza, malas condiciones ambientales, falta de acceso a infraestructuras urbanas y a servicios sociales, etc. constituyendo la cara más visible de las desigualdades sociales. "Los habitantes que habitualmente carecen de agua limpia y saneamiento no pueden distanciarse socialmente y no tienen alimentos y una nutrición saludable para mantener el sistema inmunológico fuerte. La crisis nos recuerda que la vivienda, la alimentación y la nutrición adecuadas, el agua potable, el saneamiento, un medio ambiente sano y la asistencia sanitaria son necesidades humanas universales y, por lo tanto, derechos humanos" (HIC, 2020).

Asimismo, la crisis deja al descubierto las desigualdades cruzadas que padecen importantes grupos en la región, en general, y en América Central, en particular. A estas desigualdades cruzadas se suman los impactos del COVID-19:

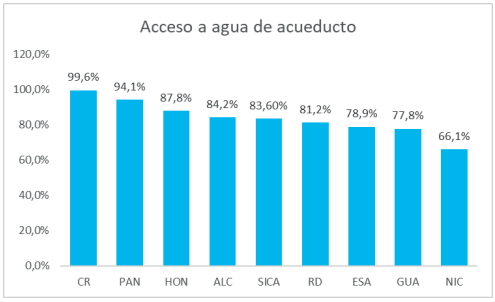
Centro América como foco del diálogo

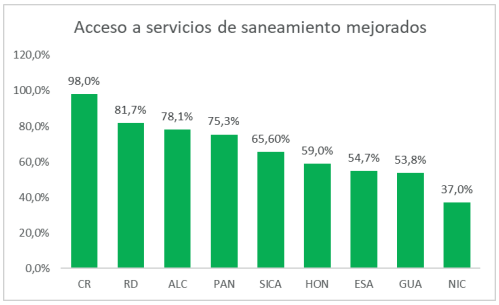
Según el *Estudio de la urbanización en Centroamérica: Oportunidades de una Centroamérica urbana* (2018), Centroamérica es hoy la segunda región de más rápida urbanización en el mundo. La urbanización aumenta a gran velocidad, lo que trae consigo desafíos apremiantes. Hoy en día, el 59 por ciento de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, pero se espera que en la próxima generación 7 de cada 10 personas vivan en ciudades. Al ritmo actual de urbanización, la población urbana de la región se duplicará en tamaño hacia 2050, demandando mayor y mejor infraestructura, una mayor cobertura y calidad de los servicios urbanos y mejores oportunidades de empleo. Tal y como señala el estudio, los principales desafíos para el desarrollo de la región están relacionados con la falta de inclusión social, la vulnerabilidad a los desastres naturales y la falta de oportunidades económicas y de competitividad (véanse indicadores sociales y de calidad de vida).

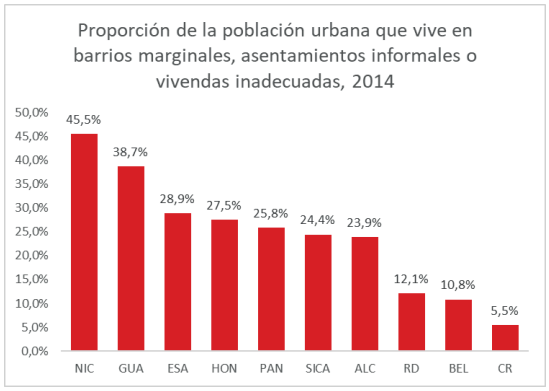
Indicadores sociales y de calidad de vida en América Central



País	Tasa de pobreza (población con ingresos por debajo de 5USD al día)	Tasa de pobreza extrema (población con ingresos debajo de 3.1USD al día)
HON	56,2%	37,6%
GUA	54,7%	36,1%
NIC	50,6%	30,3%
SICA	35,4%	20,3%
ESA	34,7%	15,4%
ALC	28,5%	15,7%
RD	20,4%	7,8%
PAN	17,2%	9,4%
CR	14,3%	5,8%







Fuente: SISCA (2020) con base en indicadores disponibles en la sección Ingreso y Desigualdad del Sociómetro del BID.

Nota: Los datos para CR, ESA, GUA, HON, PAN y RD corresponden al año 2017, para NIC el dato más reciente corresponde al 2014.

Situación habitacional de la región

En los países de América Central existe un importante déficit habitacional que contribuye a la formación de asentamientos informales, los cuales albergan aproximadamente al 29% de la población urbana. En el caso de Guatemala y Nicaragua los porcentajes son de 39 y 45 respectivamente. Estos asentamientos tienden a localizarse en zonas de riesgo a inundaciones, deslizamientos y terremotos. Asimismo, 3 de cada 10 vivienda se encuentran en zonas de alto riesgo y de los 11.3 millones de hogares estimados en 2009, el 37% tenía algún tipo de déficit cualitativo. La demanda por vivienda de calidad aumenta significativamente porque se estima que 290,00 hogares se constituyen anualmente.

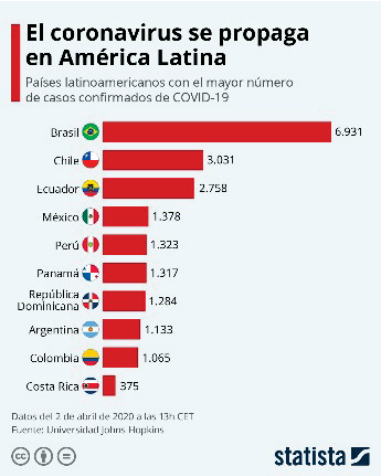
En este marco, el acceso a vivienda asequible es limitado. La oferta de vivienda con servicios básicos y ubicada cerca de servicios e infraestructuras públicas no está al alcance de los grupos de bajos ingresos. Existen programas de créditos hipotecarios, pero estos no atienden a la población con escaso recursos. Además, las ciudades de la región son vulnerables ante fenómenos naturales, incrementando el riesgo de desastre. La tendencia a la aglomeración de personas y actividad económica en zonas de alto riesgo aumenta esta vulnerabilidad. Los desastres ligados a sismos, huracanes e inundaciones representan la mayoría de las pérdidas económicas especialmente en las ciudades. Los desastres en la región han tenido efectos negativos importantes para la economía y los procesos de desarrollo.

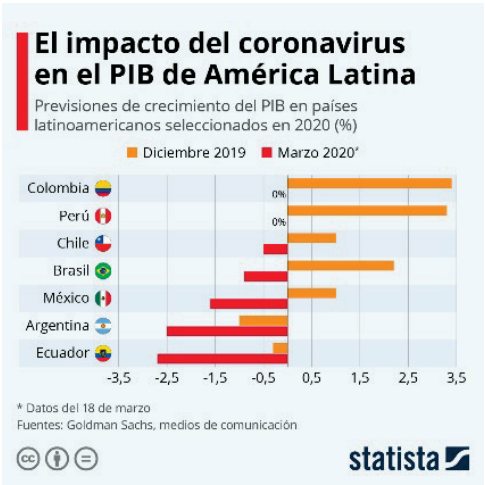
Fuente: Becerril Miranda (2020). Con base en Agustin, M., Acero, J. L., Aguilera, A. I., & Marisa, G. (Eds.). (2018). *Estudio de la urbanización en Centroamérica: Oportunidades de una Centroamérica urbana*. https://doi.org/10.1596/978-1- 4648-1220-0

Impacto económico de la COVID-19

A los desafíos que imponen la falta de inclusión social, la vulnerabilidad a los desastres naturales y la falta de oportunidades económicas y de competitividad, se suman los efectos de la crisis desatada por la pandemia COVID-19.

Según CEPAL (2020), los efectos de la crisis impactan en la región a través de seis canales externos de transmisión: 1) La disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos. 2) La caída de los precios de los productos primarios. 3) La interrupción de las cadenas globales de valor. 4) La menor demanda de servicios de turismo. 5) La reducción de las remesas y 6) la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, debido al clima de incertidumbre. Asimismo, se prevé que el valor de las exportaciones de la región caerá por lo menos en 10,7% en 2020, debido a la disminución de los precios y a la contracción en la demanda agregada global. Además, dado que la propagación del virus ha acelerado el uso de internet y de las tecnologías digitales, este aumento puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y entre los grupos de ingresos.





Mientras que estos efectos causarán una disminución de la actividad manufacturera también los servicios se verán afectados. Es ilustrativo considerar que, **si la prohibición de viajes a causa de la COVID-19 se prolonga por dos o tres meses, la actividad turística en el Caribe, por ejemplo, en 2020, se contraería entre 17% y 25%. No es complejo imaginar el impacto que ello tendrá en los países de la Subregión. República Dominicana, por citar un caso, deriva el 8% de su PIB (y casi igual porcentaje de la población empleada) de actividades de Alojamiento y Restaurantes cuya dinámica está fuertemente influenciada por el turismo externo**.

En gran medida, estos impactos afectarán desproporcionalmente a las zonas urbanas de la región y se expresarán en un incremento del desempleo y un crecimiento de la informalidad urbana. Más aun, los efectos de la crisis han llevado a pronosticar una caída del PIB de al menos -1,8%, aunque no se puede descartar que se llegue a contracciones de entre -3% y -4%. Como lamentablemente ha sido experimentado por la Región en crisis anteriores, **ello implicará una expansión de los asentamientos informales que hoy en día —como se señaló— ya representan el 21% de la población urbana.** Para 2020, de confirmarse estos datos, **se pasará de los actuales 186 millones de pobres a 220 millones y de los actuales 67,5 millones de latinoamericanos y caribeños que viven en condición de pobreza extrema a 90,8 millones.**

Por si ello no fuese suficiente, **la crisis de la COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS).** Este deterioro de las condiciones sociales y económicas en una región que mostraba ya desaceleración económica obliga a pensar que el hacinamiento, la construcción de viviendas precarias y los asentamientos humanos en zonas de riesgo serán fenómenos que tomarán renovada fuerza en los países de América Latina y el Caribe. Ante esta emergencia sanitaria, no se puede dejar de lado que estas poblaciones enfrentan mayores riesgos de contagio al virus debido a las deficientes condiciones de salubridad y a la elevada densidad poblacional acompañada de hacinamiento. Asimismo, es claro que esta crisis ha hecho evidente las severas limitaciones del modelo de desarrollo vigente y, por ende, mal haríamos en pretender superarla repitiendo mecánicamente lo hecho en el pasado. Esta pandemia entraña el potencial de transformar la orientación de las políticas públicas y abrir espacio al necesario debate sobre un nuevo, sostenible e igualitario modelo de desarrollo urbano. Esta es la tarea para los diversos actores involucrados en la formulación de la política pública.

El punto de partida para ello es reconocer que son los Estados – tanto al nivel nacional como subnacional – los que están asumiendo un papel central para suprimir el virus y enfrentar los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social. Ante la emergencia, se vuelve imperioso planificar las acciones que se realizarán inmediatamente luego de superada la crisis sanitaria. Si bien existirá una gran presión sobre los formuladores de política para implementar acciones que reviertan la caída de la actividad económica y el empleo, no es menos cierto que las futuras medidas deben enfocarse en las zonas más afectadas que no son otras que las mayores ciudades. Por supuesto, estas acciones dependerán del espacio fiscal existente. Sin embargo, no es muy equivocado pensar que el camino para reactivar la economía y generar empleo será a través de un cambio de paradigma en la construcción de infraestructura, programas de vivienda y de desarrollo urbano integral que incorporen temas de sustentabilidad, inclusión y resiliencia. Asimismo, deberán contemplar mecanismos de financiación innovadores enmarcados en políticas que faciliten y orienten las inversiones pública y privada y que tengan como foco las necesidades de las personas y los territorios -con sus activos y fragilidades.

En este sentido, vale la pena recordar que la tercera parte de las autoridades nacionales responsables de los temas urbanos y/o de vivienda en América Latina y el Caribe desarrollan su función integrada con las carteras de obras públicas o economía. Ya en el pasado se ha acudido a la construcción de vivienda nueva e infraestructura como la manera rápida de obtener dinamización económica. Ello plantea una gran inquietud: **¿Cómo implementar esa recuperación de manera diferente a la tradicional práctica de incentivar la producción de vivienda nueva en zonas suburbanas y con la participación exclusiva de los grandes actores de la construcción?**

De este modo, **el desafío para política pública parece ser acompañar estos esfuerzos –de corte más bien tradicional– con acciones específicas a las realidades nacionales y que propicien el fortalecimiento de los circuitos económicos locales**. Las opciones son múltiples y dependen del contexto: ocupación de suelo actualmente vacante, utilización de las viviendas vacías, mejoramiento de barrios con operaciones urbanas integrales basadas sobre la recuperación del valor creado a través de la inversión pública y apoyo técnico a la autoconstrucción en suelo seguro, etc. son estrategias que tienen que ser rigurosamente evaluadas desde el nivel nacional y local.

Otra importante línea de acción es la potenciación de los efectos multiplicadores de la construcción o renovación de vivienda a partir de involucrar pequeñas y medianas empresas locales en la producción de materiales cuya generación implique capturas de carbono en lugar de su liberación y que sean intensivas en empleo antes que en capital. Ello requiere de estrecha coordinación con la política industrial nacional y tiene la gran virtud de que los efectos distributivos de la inversión de recursos públicos contribuirán a reducir la gran brecha de desigualdad existente en los países de la región y aportarán significativamente a la construcción de un desarrollo local inclusivo y resiliente. **Esta "recuperación verde" involucra atender las dimensiones económica, social y ambiental del Desarrollo urbano a la vez que orienta las acciones hacia la construcción de sociedades más incluyentes y sostenibles ante futuras pandemias, cambio climático y otros retos globales**.

Premisas para la acción estratégica y buenas practicas

El Banco Inter-Americano de Desarrollo (2020) propone 5 ejes de acción para abordar la emergencia:

DIFUNDIR: que propone estrategias para generar talleres de capacitación de líderes comunitarios y Planes de difusión mediante señalética en el espacio público.

IDENTIFICAR: que propone estrategias para generar el levantamiento de población en riesgo.

PROTEGER: que propone estrategias para generar la habilitación de espacios de cuidados saludables y la habilitación de puntos de higiene temporal.

CONECTAR: que propone estrategias para generar la distribución de dispositivos de internet móvil para los hogares y dispositivos de internet móvil para espacios públicos.

CONTROLAR: que propone estrategias para generar un plan de distribución de comercios por sectores y un plan de localización de prestadores de servicios sociales.

Proponemos, entonces, diferentes premisas para alinear la acción de emergencia con estrategias que contribuyan a la recuperación del largo plazo:

- ***Prioridades de inversión y atención***

El acceso a una vivienda adecuada es una condición fundamental para proteger el derecho a la vida y de la velocidad de respuesta depende la efectividad de la prevención de la mortalidad.

Las determinantes sociales de la salud posicionan a la vivienda, los entornos barriales, el contexto social y comunitario como claves en la salud poblacional. Es clave asegurar que se respeten todos los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a una vivienda, alimentación y nutrición adecuadas ya que los derechos humanos son indivisibles (Plataforma Global del Derecho a la Ciudad, 2020). Por tanto, la prioridad de la atención, de acuerdo con el Informe del Relator Especial para el derecho a vivienda adecuada de Naciones Unidas, debe focalizarse en facilitar alojamiento a las personas sin hogar, en migrantes y refugiados en alojamientos temporales, asentamientos informales y en hogares amenazados con desalojos. Por su parte las organizaciones sociales como la Coalición Internacional del Hábitat para Latino América (HIC-AL) ha solicitado decretar suspensión en el pago de las rentas de inmuebles usados para viviendas o pequeños negocios familiares, de los suministros básicos, y de los préstamos o créditos hipotecarios para los hogares que pierdan o reduzcan significativamente sus ingresos.

Las buenas practicas se han focalizado en la provisión de vivienda de emergencia, adecuación de vivienda temporal y suspensión de desalojos.

- *Vivienda de emergencia para una cuarentena segura:* El caso uruguayo, donde se tomaron decisiones conjuntas desde Secretaría Nacional del Deporte (SND) y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). La medida solicita que se provea el albergue a personas en situación de calle y/o edad de riesgo dentro de instalaciones deportivas. En Kerala, se habilitaron centros de culto religioso para dicho fin.
- *Comisión de Atención Integral de Desalojos: En Barcelona se suspendieron los desahucios en una iniciativa liderada por el Ayuntamiento y el Consejo General del Poder Judicial.* En Costa Rica, por

ejemplo, se ha habilitado una coordinadora desde el Ministerio de la Presidencia para mitigar los desalojos.

- *Moratorias en hipotecas y renta en vivienda pública*: las ciudades de Montevideo, Barcelona y Valencia están haciendo un trabajo coordinado con los bancos y el sector privado para la implementación de estas medidas.

El impacto de la pandemia se sufre de manera desproporcionada en las áreas donde existe precariedad en las condiciones habitacionales como en los asentamientos informales.

La pandemia revela y exacerba las inequidades estructurales en los territorios. En esa medida, los asentamientos informales presentan usualmente altas densidades residenciales con limitado acceso a servicios domiciliarios[2], ingresos bajos sin capacidad de ahorro, con ocupaciones de alto riesgo para la salud, y carencia de servicios de salud asequibles (Mitlin, 2020). Por ello, las estrategias de aislamiento, distanciamiento social y cuarentena como se han implementado en otros contextos no son sostenibles y en otros casos no son viables en tanto ponen en riesgo la supervivencia. Por ejemplo, en el Occidente de África durante la crisis del Ébola, los intentos de cuarentena en los asentamientos causaron amplia resistencia, violencia y luego fue abandonada como medida por inefectiva.

Las buenas practicas se focalizan en acciones coordinadas de respuesta diferencial para prevenir la mortalidad en asentamientos informales deben encuadrarse como un peldaño clave del mejoramiento integral de barrios para una efectiva recuperación pos-pandemia.

- *Instalación y construcción de puntos de higiene y salud temporal en el espacio público:* La iniciativa Juntos por la Salud, impulsada por el Gobierno de México, tiene como objetivo "proporcionar información y servicios preventivos de salud, para lo cual se disponen unidades móviles, camiones equipados para brindar orientación general, que se desplazan hacia los sectores donde se identifica mayor vulnerabilidad" *(IADB, 2020:1)*.
- *Mínimo vital de consumo de agua:* En áreas sin conexión sanitaria, la Alcaldía de Cartagena (Colombia) garantizó carrotanques que aseguran el mínimo vital de agua a los hogares, mientras que en Bogotá o Montería los hogares de mas bajos ingresos (estratos 1 y 2) tienen derecho a un mínimo vital sin costo y en Medellín se reconectaron al servicio de agua de red a los hogares que no los habían podido pagar.

[2] La WHO recomienda 50 litros de agua por persona al día en momentos de no emergencia. La ausecia de agua en algunos sectores imposibilita seguir la recomendacion del lavado de manos constante.

- ***Gobernabilidad y alianzas intersectoriales***

Enfrentar la pandemia hace imperativo el aprendizaje entre organizaciones y promover alianzas estratégicas para proteger y cuidar la vida de toda la población y sobre todo los expuestos a una vulnerabilidad estructural.

Los gobiernos locales son esenciales para atender rápidamente la pandemia y deben ser soportados desde los gobiernos nacionales y organizaciones multilaterales.

Es necesario garantizar la participación de la sociedad civil en el diseño, la implementación y la evaluación de las respuestas a esta emergencia para hacer viable su implementación.

La presencia de riesgos en asentamientos precarios es multidimensional y, por tanto, las condiciones de salud se traslapan con otros aspectos crónicos de salud, riesgos naturales, tecnológicos e infraestructurales (SSHA, 2020). Por ello, la preparación y la acción temprana de gobiernos y comunidades locales es esencial basarlos en los sistemas de prevención y atención de riesgos y desastres existentes. Sin embargo, los asentamientos y los barrios en condiciones de precariedad son de alta heterogeneidad en función de sus niveles de consolidación, morfologías, localización geográfica y niveles de organización social. De modo tal que se debe evaluar los niveles de criticidad de las condiciones de hacinamiento, calidad de la vivienda, proximidad con servicios de salud, acceso a infraestructuras de saneamiento, y niveles socio económicos para diseñar una respuesta adaptada a las condiciones particulares de cada localidad. Y así, las acciones coordinadas de respuesta diferencial para prevenir la mortalidad en la pandemia deben encuadrarse como un peldaño clave del mejoramiento integral de barrios para la recuperación.

En el contexto de los asentamientos precarios es imprescindible conectar las instancias de gobernanza informal (líderes y organizaciones de base entre otras) con la formal, asegurando una movilización eficaz y el apoderamiento de las comunidades y una rendición de cuenta compartida en todas las fases desde la preparación y atención a la emergencia hasta la recuperación post pandemia.

Las buenas prácticas ponen en marcha alianzas multi-sectoriales para proteger la vida de la población mas vulnerable y encuentra mecanismos novedosos para involucrar a la población civil en el proceso.

- *Alianzas* con el sector privado *para movilizar inmuebles vacantes:* En Valencia y Barcelona se han generado nuevas alianzas para y con el sector turístico para alojar población en riesgo extremo y ampliar la oferta de unidades de alquiler social.
- *Alianzas con las iniciativas de planeación comunitaria para coordinar respuesta a la emergencia:* En Bulawayo (Zimbawe), la red de Slum Dwellers International se alió con la National University of Science and Technology (NUST) y el Concejo de la Ciudad para crear plan orientado a las mejoras de las áreas informales.
- *Alianzas publicas multi-nivel de atención solidaria:* El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica estableció un protocolo de acción con roles, planeación y colaboración efectiva entre los niveles comunitario, municipal y nacional, con una gobernanza robusta de la gestión de la emergencia y fortaleciendo la gobernanza urbana y de política pública a largo

plazo en línea con los principios de gobernanza multinivel, y participativa establecidos por la Nueva Agenda Urbana. El Municipio de Quilmes (Provincia de Buenos Aires, Argentina) ha dispuesto, para las personas con menos recursos, más de 110 Puntos Solidarios en las diferentes localidades del municipio, conformando un "mapa de la solidaridad" quilmeña. En estos espacios se cocina y brinda el almuerzo diariamente para los vecinos y vecinas que más lo necesitan. El programa es impulsado por el gobierno municipal -a través del Comité de Emergencia- de forma articulada con organizaciones sociales, la Iglesia y soldados del Ejército argentino con el objetivo de llegar a cada uno de los barrios de la ciudad. Esta iniciativa forma parte del conjunto de acciones implementadas por el gobierno municipal en articulación con el gobierno nacional y provincial.

- *Alianzas de sociedad civil y gobiernos locales:* La ciudad de Lisboa está gestionando una Red de solidaridad (Rede solidária de Lisboa) para reunir voluntarios/as y apoyar a la población más vulnerable. A través de un formulario en línea a cumplimentar por cualquier persona que desee ayudar, el ayuntamiento organiza las ofertas de la ciudadanía. Las diferentes freguesias (parroquias) de la ciudad también están organizando a sus voluntarios. En Madrid, el ayuntamiento ha creado el espacio "Madrid sale al balcón" para organizar las propuestas ciudadanas durante la pandemia, dentro de su plataforma de participación. El portal, abierto a ciudadanos particulares y también a asociaciones de la ciudad. En Sofía, el Ayuntamiento está recibiendo ofertas de ayuda de los ciudadanos, que se van a unir a la formación municipal de voluntarios para que ayude a los ancianos a conseguir comida y medicamentos en la ciudad (OIDP, 2020).

- ***Sistema de cuidados***

Transitar hacia una sociedad de los cuidados, reconociendo el rol de las mujeres como cuidadoras de hogares y comunidad (Plataforma Global del Derecho a la Ciudad, 2020).

Como ha advertido la CEPAL, uno de los desafíos más importantes que tiene la región es "la reorganización social de los cuidados para alcanzar la plena corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y las familias" (2020: 2). En general en las ciudades, y aún más en los barrios y asentamientos precarios, el impacto central de la pandemia genera una excesiva carga de cuidados en las mujeres y niñas donde ya en el período previo a la crisis sanitaria, las mujeres destinaban entre 22 y 42 horas semanales a actividades de trabajo doméstico y de cuidados (CEPAL, 2020). Por un lado, hay evidencias claras del incremento de la violencia de genero en países como Sur Corea, China, el Reino Unido y en los países que experimentaron la crisis del Ébola. Por otro lado, el impacto económico es desigual en la capacidad de generar ingresos entre hombres y mujeres con especial impacto en trabajadores migrantes y una mayor proporción de trabajadoras del sistema de salud que las exponen a mayores riesgos ya que estas representan el 72,8% del total de personas ocupadas en ese sector en la región (CEPAL, 2020).

La conexión y alianza con lideres y lideresas y organizaciones territoriales de base es una precondición para una respuesta y recuperación efectivas que prioricen los sistemas de cuidado.

En coordinación con los líderes comunitarios se puede trabajar de la mano para diseñar e implementar de manera mas efectiva las intervenciones. Según TECHO, en la región, al menos 76% de los asentamientos cuentan con alguna organización social en la comunidad. Como lo plantea el Banco Inter- Americano de Desarrollo, "Los líderes comunitarios son voces creíbles para los residentes de los

barrios por lo que pueden ser canales de comunicación rápida y eficaz de protocolos sanitarios de prevención y detección temprana, así como para articular asistencia social de emergencias (violencia, primera infancia, consumo) y necesidades de apoyo psicológico" (IADB, 2020:1). Se requiere la comunicación entre vecinos y a la vez limitar la circulación en los barrios y permitir su funcionamiento. En asentamientos informales, "el 72% de los niños/as y adolescentes (de 5 a 17 años) no cuenta con un celular propio. Mientras que estos números descienden a 54% para nivel socioeconómico medio (y 43% alto). Además, de acuerdo con la misma fuente, el 55% de los niños no suele usar internet en asentamientos, mientras que en nivel socioeconómico medio solamente un 32% no lo hace (y 13% alto). Asimismo, los jóvenes de los hogares más pobres tienen menor probabilidad de acceder a una computadora y de adquirir habilidades digitales que sus pares de los hogares más ricos (IADB, 2020:1). Por ello, es vital garantizar diferentes medios para garantizar la conexión del estado local con lideres comunitarios y a su vez que ellos puedan seguir en contacto con los vecinos otorgando facilidades de conexión digital segura.

Las buenas prácticas se focalizan en recuperar y fortalecer los servicios públicos comunitarios y minimizar la circulación de vecinos para acercarse en búsqueda de servicios sociales, así como también el apoyo psicosocial de los impactos mentales, emocionales y los riesgos de violencia de genero

- *Acceso remoto a los servicios de salud:* La Municipalidad de Córdoba (Provincia de Córdoba, Argentina) a través de la Secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales desarrolló la aplicación "VECINO SALUD", una herramienta digital informa a los ciudadanos de córdoba de manera oficial la situación actual de la COVID-19 y permite que se realicen un auto-chequeo para saber si los síntomas que presentan son compatibles con el coronavirus. La ciudad de Guangzhou (Corea) monitorea a los pacientes de COVID-19 vía una app que permite consultas médicas telefónicas en el confinamiento.
- *Servicios estatales descentralizados en los barrios:* el programa El Estado en Tu Barrio del ministerio de Desarrollo Social de Argentina que acerca los servicios del Estado a los Barrios en estructuras temporales.
- *Atención psico social en línea:* En Medellín, la Línea 123 Mujer especializada en violencia de genero ha recibido y canalizado múltiples demandas en la pandemia. En Viena y en Lima se diseñó una iniciativa para abordar el impacto en la salud mental del confinamiento.
- *Movilidad segura para trabajadores de la salud:* La ciudad de Villavicencio puso a disposición un sistema de bicicletas públicas -"Villa Bici"- al servicio de los trabajadores de la salud. En el estado de Kerala en India han habilitado el uso de equipamientos religiosos y sociales para expandir la capacidad de atención de salud.
- *Conectividad segura en el espacio publico y cierre de la brecha digital*: En Ruanda, en campamentos de migrantes, se desarrolló el "Kiosco Solar Móvil", un sistema integrado para la carga de pequeños dispositivos electrónicos utilizando energía solar. Permite la carga de 20 aparatos simultáneamente y 60 equipos por día. En algunos de estos casos también se brinda servicio de Wi-Fi a través de mochilas que emiten señal en espacios públicos donde se pueda acceder a servicios de telefonía e internet siguiendo protocolos de no proximidad.
- *Entregar dispositivos de internet móvil para mejorar la conectividad digital de los hogares:* "En Villa 20, Ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde viven unas 30 mil personas, la iniciativa Atalaya Sur, enmarcada en el Proyecto Comunidad, con el objetivo de la apropiación tecnológica y la reducción de la brecha digital, impulsó la creación de una red comunitaria de

conectividad. Se trata de una red WiFi desarrollada a través de un proceso colaborativo, que gracias a una solución técnica combinando fibra óptica y radiofrecuencia logró extender un proyecto piloto inicial a la cobertura de las principales calles del asentamiento" (IADB, 2020).

- *Fortalecimiento de actividades educativas para estudiantes rezagados:* En España el Projecte Rossinyol –Programa de mentoreo intercultural de jóvenes- tiene por objetivo la integración socioeducativa mediante i) la reducción de las tasas de abandono escolar, ii) el aumento de confianza de los estudiantes y iii) el mejoramiento del nivel educativo. Para ello, estudiantes universitarios son capacitados como mentores y tienen la responsabilidad de acompañar a adolescentes en condiciones de desventaja para ofrecerles oportunidades culturales, educativas y sociales (IADB, 2020).

- ***Sustento y economía local***

En la meta de prevenir la mortalidad se tienen que considerar no solamente las relacionadas con el COVID-19 sino también con la mortalidad relacionada con las medidas económicas tomadas (ej. malnutrición o enfermedades crónicas no atendidas)

El sistema territorial urbano es interdependiente de todos sus habitantes y áreas. Los barrios y asentamientos precarios son una parte vital para el funcionamiento de la ciudad como un todo. Los barrios suelen tener un tejido económico rico y dinámico centrado en el comercio, la producción y la provisión de servicios (IADB, 2020). El impacto es profundo en la medida que los habitantes tienden a experimentar desempleo, empleo precario en el sector informal que depende de la actividad urbana y se exponen a la perdida de ingresos debido al cierre temporal de negocios y limitado o nulo acceso a protección social. Estas condiciones impactan negativamente la habilidad de pagar servicios, alquiler y adquirir los insumos básicos para el hogar. A esto se suma que muchos de los habitantes no pueden parar de trabajar, ya que están ligadas a los servicios esenciales de la ciudad y exponiéndose de manera desproporcionada al contagio.

Las buenas practicas operan en proteger a los trabajadores esenciales que están mas expuestos a la pandemia, cubrir las necesidades básicas alimentarias de hogares en riesgo de malnutrición y evitar el colapso económico de las unidades productivas pequeñas en los territorios vulnerables.

- *Apoyo monetario y alimenticio: La Alcaldía de Bogotá activó el programa Bogotá Solidaria en Casa, enfocado en las familias de ingresos más bajos, realizando un giro de plata proveniente de recursos nacionales y de la Alcaldía equivalente a US $150 a través de transferencias monetarias (incluso utilizando teléfonos celulares), distribución de bonos canjeables con tarjetas, y subsidios en especie como las entregas de canasta familiar para la seguridad alimenticia de las familias (IADB, 2020).*

- *Seguridad alimentaria y acercar comercios a los hogares de los vecinos:* Ixtapalapa y Montevideo han generado un sistema de Banco de alimentos con distribución coordinada por los comités locales para su distribución domiciliaria. La iniciativa de Carteiro Amigo es un servicio de correo comunitario con mapeo algorítmico, utilizado en favelas de Río de Janeiro. Las familias se inscriben en el servicio y con ello se crea una dirección y un número de identificación para realizar entregas y recolecciones de correo y paquetes directo a domicilio, en contextos

informales con tramas urbanas orgánicas, calles a menudo sin nombre y números sin secuencias lógicas (IADB, 2020).

- *Apoyo a las unidades productivas locales:* El gobierno local de Morelia, México, lanzó la iniciativa "Haz Barrio, Compra Local" haciendo un llamado a la solidaridad humana para contener el impacto económico en medio de esta crisis sanitaria, impulsando a los pequeños comercios que no pueden competir con cadenas internacionales, generando comunidad y lazos de solidaridad entre la misma población.

- ***Datos espaciales y conocimientos territoriales***

La toma de decisiones tiene que basarse en la evidencia de salud publica, los datos territoriales y los conocimientos de las organizaciones sociales sobre las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad instalada en los territorios para coordinar acciones efectivas.

Los datos y conocimientos sobre las condiciones de vulnerabilidad y la capacidad instalada en los territorios de habitabilidad precaria son esenciales para coordinar acciones.

Brindar información precisa y oportuna sobre cuestiones de salud pública es esencial. El desafío, sumado a la novedad del COVID-19, es la carencia de datos confiables sobre muchos asentamientos precarios y menos sobre las condiciones de salud de su población. Por ello, es clave hacer alianzas con centros de investigación con conocimiento medico y con los expertos en desarrollo urbano para aportar al diseño estratégico de medidas adecuadas al contexto. Sin embargo, existe una emergente cantidad de iniciativas estatales y no estatales para abordar la respuesta a la pandemia que directa o indirectamente involucran a los asentamientos informales. Las iniciativas de plataformas de monitoreo, atención y aprendizaje sobre la pandemia aun son fragmentadas, dispersas y aun no hacen sinergias para la acción estratégica. A su vez, la pedagogía pública es clave para contrarrestar la desinformación y rumores que promueven el miedo, la confusión y la falta de confianza en las instituciones.

Las buenas prácticas operan tanto en la pedagogía publica para generar una información clara y desmentir rumores, así como también reconocen practicas y conocimientos de las condiciones territoriales de las comunidades.

- *Plataformas oficiales de información pública*: El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y la Secretaría de Salud, pone a disposición de la ciudadanía el sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx para dar a conocer información oficial y actualizada sobre la contingencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
- Mapeo *comunitario* de áreas informales: La iniciativa de Slum Dwellers International, Know Your City, en varios asentamientos de África y Asia, moviliza a los habitantes a producir datos detallados de las localidades en sistemas abiertos para incorporación de nuevos datos. De manera similar, el mapeo ya realizado en Argentina para la Ciudad de Buenos Aires, denominado Caminos de la Villa permite que, desde un teléfono móvil, se añada información georreferenciada al mapa para identificar áreas críticas para la atención.
- *Iniciativas ciudadanas de Fact Cheking:* En Taiwán, una organización sin ánimo de lucro para la verificación de hechos llamada "Taiwan FactCheck Center" (centro de de verificación de hechos de Taiwán) está recibiendo numerosas aportaciones de la sociedad civil para poder luchar contra la desinformación y los rumores. Cualquiera puede enviar información al centro para comprobar su veracidad (OIDP, 2020).
- *Análisis de datos abiertos con la ciudadanía sobre movilidad:* La alcaldía de Bogotá, junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil, ha lanzado el concurso Hackatón #MOOVID19 para que la ciudadanía comparta propuestas de análisis de datos sobre cómo se puede mejorar la organización del transporte público en la ciudad durante la pandemia para

servir a quienes necesitan utilizarlo y evitar contagios. Una vez premiadas las mejores propuestas, serán implementadas por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.

- *Señalética para el espacio público:* El gobierno de la ciudad de Buenos Aires produjo puede contribuir a reforzar pautas de comportamiento. A su vez, debe acompañarse de la comunicación e información por parte de líderes comunitarios que ayuden a transmitir los protocolos de prevención y detección temprana.

Estrategia regional de recuperación

La crisis es un punto de no retorno y las acciones tomadas hoy cambiaran las ciudades del futuro (UCLG, 2020). Por tanto, se requiere repensar como se desarrollan los sistemas territoriales para generar ciudades seguras, inclusivas y resilientes.

El mejoramiento integral de barrios ha sido una estrategia de larga trayectoria en la región que cuenta con una amplia memoria institucional y ciudadana crucial para movilizar esfuerzos en diferentes niveles territoriales para la respuesta a la crisis.

Esta es una oportunidad para promover una alianza intersectorial regional que apoye decididamente el mejoramiento integral de barrios saludables como la mas expedita estrategia tanto en la respuesta inmediata como la recuperación de largo plazo.

- *Fondos de proyectos de iniciativa comunitaria:* Es fundamental apoyar a las comunidades para que desarrollen los proyectos que cada barrio necesita en el periodo de recuperación de acuerdo con su idiosincrasia. La provisión de financiamiento no reembolsable, o la provisión de créditos, o gestión de fondos de ahorro, puede ser un gran potenciador de las comunidades en el periodo de reactivación para llevar a cabo proyectos comunitarios de infraestructura o vivienda. El Asian Coalition for Community Action es un ejemplo de cómo puede funcionar en más de 19 países (IADB, 2020).

Hacia una visión colectiva de la vivienda como infraestructura de cuidado[3]

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha puesto de relieve, de forma inédita, la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y la poca visibilidad que tiene este sector en las economías de la región, en las que se sigue considerando una externalidad y no un componente fundamental para el desarrollo (CEPAL, 2020). En los últimos años las agendas internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Nueva Agenda Urbana, renovaron el compromiso de los países de la región con la puesta en marcha de soluciones efectivas y definitivas para el problema habitacional. La pandemia del COVID-19 vuelve a recordar que esas agendas son urgentes y están totalmente vigentes. En el nuevo escenario e inscritos en los objetivos comunes ya acordados proponemos la siguiente visión y objetivos a fin de desarrollar una respuesta adecuada que establezca las bases para una vivienda como infraestructura de cuidado:

[3] Elaborado con base en Ortiz, C. & Boano, C. (2020). 'Stay at Home': Housing as a pivotal infrastructure of care? https://blogs.ucl.ac.uk/dpublog/2020/04/06/stay-at-home-housing-as-a-pivotal-infrastructure-of-care/

- **Gobernanza urbana mejorada para la justicia espacial (ODS 5-17):** la gobernanza urbana opera a diferentes escalas a través de un ecosistema de instituciones formales e informales donde los actores estatales, de la sociedad civil y del sector privado negocian marcos regulatorios y prácticas en torno a la producción y el uso de la vivienda. La naturaleza de la gobernanza es un factor clave que influye en cómo la vivienda puede aumentar o reducir la desigualdad en función de su nivel de adecuación. Una gobernanza alienada con el desarrollo humano y local demanda ciudades comprometidas con la cohesión social. El paradigma de la gobernanza urbana mejorada comprometida con la justicia espacial y territorial pone al gobierno local en el centro de la escena y se sustenta en la gestión de las redes internas de actores, a los que debe conducir, y externa, con otros niveles de gobierno, redes de ciudades e inversores. De este modo, las respuestas a los desafíos relacionados con la vivienda desencadenados o exacerbados por la pandemia deben descentralizarse, respondiendo en el menor tiempo posible a las necesidades reales en el terreno.

- **Mecanismos y mercados financieros más justos para el acceso a la tierra y la vivienda (ODS 8-12) y a servicios básicos:** los "mercados" son un componente central de la vivienda, en relación con la forma en que se accede y valora la tierra, las finanzas, los materiales, la construcción y las ventas. El funcionamiento de los mercados de tierra y vivienda debe necesariamente ajustarse a las dinámicas de los mercados de trabajo, comprometiendo a los gobiernos en políticas activas de producción de vivienda social bien ubicada y servida y de generación de empleo genuino. Asimismo, resulta necesario garantizar que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a los servicios de salud y de educación -evitando que el confinamiento exacerbe las desigualdades educativas. Esto plantea desafíos importantes en contextos marcados por la vulnerabilidad socioeconómica y el acceso limitado a internet.

- **Abordar la falta de vivienda mediante la provisión de viviendas de emergencia y la prevención de desalojos.** En el contexto de la crisis COVID-19 resulta imprescindible abordar y prevenir la falta de vivienda cuando las personas no tienen un hogar o corren el riesgo de perder el que no tienen, poniendo a disposición viviendas de emergencia para alojar a personas que no tienen un hogar y permitir su confinamiento seguro. Por ejemplo, las ciudades de Valencia y Barcelona han desarrollado nuevas alianzas con el sector privado para movilizar unidades de vivienda vacantes, mientras que Viena ha ampliado su programa de refugios de invierno.

- **Mejores condiciones de vida para los migrantes y las personas en viviendas temporales (ODS 8, 9, 13,16):** somos testigos de la falta de capacidad de las instituciones de vivienda y los tomadores de decisiones para abordar la desigualdad y la asequibilidad de la vivienda. Resulta necesario que los gobiernos se comprometan en soluciones de vivienda digna asequible para los sectores más desfavorecidos, respetando la visión de la vivienda como derecho humano.

- **Mejora de la resiliencia urbana y la salud física y mental a través de la vivienda (ODS 3, 5, 16):** en la mayoría de las ciudades, las enfermedades mentales y físicas y la muerte prematura se concentran de manera desproporcionada en las comunidades pobres y las minorías. Sin embargo, la vivienda es un elemento esencial de la salud de las personas. Los vínculos entre vivienda y salud se entienden en relación con las características de la vivienda, como la calidad de la construcción, la ventilación y la calefacción, pero también el acceso a los servicios públicos, la educación, el empleo y la ausencia de contaminación y degradación ambiental. La

retirada estatal a largo plazo y la mala gobernanza han provocado el abandono de la vivienda como un proceso político dentro del sistema urbano y territorial. Necesitamos impulsar el tipo de transformaciones institucionales para permitir mejoras estructurales en la vivienda y la salud y cambiar la política urbana hacia ciudades más saludables.

- **Viviendas más eficientes en el consumo de energía, bajas en carbono, innovadoras y sostenibles (ODS 7, 9, 12, 13):** las ciudades de todo el mundo funcionan como metabolismos lineales donde la vivienda y la infraestructura construida tienen una esperanza de vida de diseño fija. Las reservas de viviendas también pueden verse como procesos metabólicos, desde su creación a partir de materias primas hasta su transformación y destrucción al final de su ciclo de vida. Esto tiene consecuencias ambientales y sociales insostenibles que deben corregirse. Una apreciación de la ciudad como un "metabolismo circular" promoverá la transición hacia un futuro más sostenible e inclusivo, con la naturaleza y los entornos no humanos. No obstante, tenemos sistemas de acción política disfuncionales para la provisión de viviendas que producen un consumo intensivo de energía. Necesitamos abogar por modos innovadores de producción de viviendas en las ciudades del Sur Global.

Preguntas clave

(1) ¿Qué medidas inmediatas ante al COVID-19 se están tomando en la región de cara a mitigar las consecuencias de la pandemia en la población residente en asentamientos precarios y vivienda social?
(2) ¿Cómo las medidas inmediatas ante al COVID-19 dialogan con los temas de la NUA y ODS? ¿Qué cuestiones es necesario impulsar? ¿Cómo reorientar las políticas de vivienda y asentamientos precarios en el contexto post COVID-19?
(3) ¿Cómo estás medidas pueden reforzar mecanismos de gobernanza de las acciones públicas? ¿Qué prácticas se están llevando adelante desde los gobiernos locales y la sociedad civil para mitigar los efectos del COVID-19?

MENSAJES CLAVE

Las estrategias de aislamiento, distanciamiento social y cuarentena como se han implementado en otros contextos no son sostenibles y en otros casos no son viables en la medida en que ponen en riesgo la supervivencia de los habitantes de áreas con condiciones de habitabilidad precaria.

La estrategia más expedita para capitalizar la respuesta inmediata y aportar a la recuperación pos-pandemia de largo plazo es generar una alianza intersectorial regional que catapulte un renovado programa de mejoramiento integral de barrios saludables.